

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 530/00



H103062686622

**JUICIO: LUNA JULIO ALEJANDRO Y OTROS c/ GURUEL S.R.L.Y /U OTROS s/  
COBRO DE PESOS 530/00**

San Miguel de Tucumán, 15 de marzo de 2021

**AUTOS Y VISTOS:** Vienen los autos del título "LUNA JULIO ALEJANDRO Y OTROS c/ GURUEL S.R.L.Y /U OTROS s/ COBRO DE PESOS" los que se tramitan por ante este Juzgado del Trabajo de Primera Instancia de la VI Nominación, para resolver la caducidad de instancia impetrada, de cuyo estudio

### **RESULTA:**

En fecha 19/08/2020 se presentó la letrada María Mercedes Mijalchik en su carácter de apoderada de la parte demandada, GASNOR SA y dedujo caducidad de instancia en los autos del título por no haberse instado el proceso durante el período de un año, conforme art. 40 del CPL.

En dicha oportunidad argumentó que en los autos del rubro se encontraba pendiente la notificación a la empresa IECSA y que la abogada de los actores solicitó cédula y luego denunció su extravío en fecha 06/12/2018. Agregó que el juzgado confeccionó cédulas el 19/02/2019, la que fue retirada en fecha 10/04/2019, y que a la fecha no se consigna diligenciamiento, ni devolución de la misma. Además expresó que considera que el retiro de una cédula no constituye *per se* un acto impulsorio del proceso.

Sin perjuicio de ello y considerando que en fecha 17/03/2020 se inició la feria judicial -con motivo del aislamiento preventivo y obligatorio- y que la reanudación de plazos tuvo lugar en fecha 26/05/2020; aún si se tomara lo último acontecido en el expediente (retiro de cédula del 10/04/19) al 17/03/2020, transcurrieron 11 meses y 6 días, sumado que a partir del 26/05/2020 (día en que se reanuda el computo de plazos) al día de la fecha, han transcurrido casi 3 meses más, encontrándose cumplidos los 12 meses de inactividad procesal en autos.

Concluyó destacando que el proceso llevado por la actora tiene fecha de inicio en el año 2000, o sea 20 años actualmente, y su actuación hasta el día de hoy no demuestra una activación razonable, sino una mera dilación en el tiempo, sin realizar actos útiles o diligencias para lograr su resultado final.

Corrido traslado de la incidencia a la accionante su letrada apoderada, Estela Palacio, la contestó mediante presentación digital de fecha 14/09/2020 y solicitó su rechazo con costas. Fundamentó su pedido en que no tuvo devolución de la cédula ley N° 22172 diligenciada en CABA, y que por ello presentó un escrito en fecha

26/02/2020 (que pone a disposición de este Proveyente) requiriendo se libre a su cargo carta documento por Correo Argentino para notificar el proveído a IECSA SA como ya estaba ordenado; agrega que hasta la fecha no fue proveído su escrito por lo que debe ser rechazada la caducidad de instancia planteada.

Por último en fecha 26/11/2020 se remitió los autos del rubro al Sr. Agente Fiscal de la IIª Nominación, quien dictaminó en fecha 22/12/2020 expidiéndose por la procedencia de la caducidad impetrada.

**CONSIDERANDO:**

Encontrándose los presentes autos en estado de resolución, es dable aclarar que el instituto de la perención presupone la existencia de tres condiciones: una instancia abierta -sea principal o incidental-, inactividad procesal absoluta o jurídicamente irrelevante, y el transcurso de los plazos de inactividad establecidos por la ley.

En ese marco abierta la instancia, - la que se opera con la interposición de la demanda- pesa sobre el actor la carga de instar el proceso, deber obligación que solo cesa por razones de fuerza mayor o causas graves discrecionalmente apreciadas que impidan la realización de actos por la parte accionante y su omisión en el impulso. Es que la caducidad instancia prevista en el art. 40 CPL es un instituto de orden público que tiene por objeto terminar un proceso por éste medio anormal de conclusión impidiendo que se eternice. La ley presume que quien ha paralizado la instancia comenzada durante los plazos que la ley ritual fija, no le interesa continuar y renuncia a ella debiéndose expedir el órgano jurisdiccional a fin de efectivizar el derecho de la contraparte al cese de la incertidumbre de una instancia abierta por un juicio en su contra.

Es decir, debe haber transcurrido el plazo de un año (art. 40 inciso 1 CPL), computado en los términos del art. 203 CPCC (supletorio), sin que el actor haya realizado actos impulsorios del proceso.

Doctrina y jurisprudencia han señalado en forma reiterada que las actuaciones que instan el procedimiento son aquellas que lo hacen avanzar hacia la sentencia, es decir, son las que tienen por objeto pedir, realizar, urgir, justamente el acto o diligencia que corresponda al estado del juicio con idoneidad específica para hacer avanzar el mismo (Cf.: Loutayf Ranea - Ovejero López “Caducidad de Instancia”, cap. III, N31, acápite “A”, Alsina “Tratado...”, T IV, p. 459; Sentis Melendo “Perención de Instancia y Carga Procesal”, en Estudios de Derecho Procesal, T I, p. 321, N III; Parry “Perención de la Instancia”, p. 639/379; Courture “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, p. 172/174).

Para comenzar el análisis del caso que nos ocupa, resulta relevante destacar que el escrito que la parte actora manifiesta haber presentado en fecha 26/02/2020 no obra en los autos principales, ni en su versión física ni en la digital.

Al respecto, el art. 40 CPL establece que para la caducidad serán aplicables las disposiciones contenidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial con relación a este instituto, a excepción del trámite, el que se regirá por el previsto en este Código para los incidentes. Por lo que corresponde citar el art. 33 CPL que dispone que con el escrito de deducción el incidentista deberá ofrecer la prueba de la que intentará valerse. En este sentido, si bien - la letrada de la parte actora- dejó

constancia en su presentación de fecha 21/09/2020 (contestación al traslado de la caducidad de instancia impetrada por la demandada) que ponía a disposición el mentado escrito, el mismo no fue adjuntado en ningún momento, por lo tanto no es un elemento que pueda ser valorado para resolver la cuestión controvertida (conf. art. 33 CPCC, supletorio).

Ahora bien, examinadas las actuaciones cumplidas en el expediente cabe sostener que el último acto impulsivo del proceso fue el cumplido en fecha 19/02/2019, correspondiente a la diligencia obrante a f. 487 vuelta, en la que consta que este Juzgado confeccionó la cédula por la que se debía notificar la providencia de fecha 30/04/2015 (en la que se ordenaba: “Agréguese y téngase presente.- A lo demás, no habiendo dado cumplimiento la co-demandada IECSA S.A. con lo ordenado mediante proveído 20/04/2012 (fs. 387), y haciendo efectivo el apercibimiento allí ordenado, NOTIFÍQUESE las sucesivas providencias en los Estrados del Juzgado, con las excepciones previstas en el art. 22 C.P.L.- PERSONAL”) y la puso a disposición de la letrada requirente para su retiro y posterior diligenciamiento. Por lo tanto, desde la fecha 19/02/2019 hasta el 19/08/2020 (fecha en la que se interpuso el planteo de perención), existe un período de inactividad procesal que exedió el plazo de un año, conforme lo requiere el art. 40 inciso 1 CPL, para la procedencia de la declaración de la caducidad de la instancia. En este punto cabe resaltar que, como bien lo advierte la parte demandada, a la fecha no se registra en autos diligenciamiento ni devolución de la cédula retirada por la letrada de la parte actora el 10/04/2019. Ante ello debo resaltar que el retiro de cédula, por sí mismo, no constituye un trámite eficaz para instar el proceso. Ello por lo menos en el caso que nos ocupa, puesto que no se acreditó su diligenciamiento ni devolución. De ahí que no basta el solo acto de retirar la cédula para otorgarle la actitud impulsiva, sino que es necesario acreditar su efectivo diligenciamiento -ya sea que resulte exitoso o no- puesto que ese acto mostraría la intención de lograr un avance en la causa.

Al respecto se ha expresado que: *“para que el acto tenga efecto interruptivo, es menester que tienda a impulsar el procedimiento, a activarlo en forma directa o inmediata, llevando adelante la acción, tendiendo al reconocimiento del derecho alegado por las partes, “procurando la adopción de medidas adecuadas al estado de los autos, con relación directa a tal estado procesal”, efectivizando un trámite a los fines del desenvolvimiento de la relación procesal. O sea, el acto interruptivo debe ser “proporcional a las circunstancias de tiempo y estado de las actuaciones”* (Parry, Perención de la instancia, p. 369-379).

De todas maneras, ya sea que se considere como último acto impulsorio la fecha de retiro de la cédula (10/04/2019) como lo propone la demandada o bien la fecha en que se confeccionó la misma y fue puesta a disposición para su retiro y diligenciamiento (19/02/2019) como lo establece este juzgador, en ambos casos, hasta la presentación por la que la parte demandada realiza el planteo de caducidad de instancia (19/08/2020), transcurrió, sin dudar, el plazo de un año previsto en el art. 40 inciso 1 del CPL para la perención de la instancia.

Ello debido a que si tenemos en cuenta el modo de contar los plazos en el derecho -establecido por el art. 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es

de fecha a fecha,- y que el art. 203 del CPCC, establece que en el cómputo de los plazos se contarán los días inhábiles -con excepción de aquellos que correspondan a las ferias judiciales-, en autos, la caducidad de instancia se habría cumplido (adicionando los días correspondientes a las ferias judiciales de julio de 2019, enero de 2020, la feria extraordinaria que transcurrió desde el 17/03/2020 hasta el 26/05/2020 dispuesta por Acordadas N° 211/20 y cctes y ssgtes) el día 14/06/2020 (partiendo desde el 19/02/2019 fecha de confección y puesta a disposición de la cédula), por lo que se puede concluir que, a la fecha del pedido de declaración de caducidad de instancia (escrito del 19/08/2020) la instancia se encontraba perimida.

#### **COSTAS:**

Atento a las cuestiones consideradas, se imponen a la actora las correspondientes a los autos principales (cfr. art. 212 del CPCC supletorio). En relación a las costas del incidente de caducidad perpetrado estimo de justicia imponerlas a la actora vencida (art. 105 CPCC supletorio).

#### **HONORARIOS:**

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. 2 del CPL.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma es de aplicación el art. 50 inc. 2° de la citada normativa, por lo que se toma como base regulatoria -tanto para los autos principales como para los incidentes- el 30% del monto reclamado en la demanda actualizado desde el 12/05/2000 (fecha de interposición de la demanda) al 12/03/2021 con tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales (Cfr. “Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo y otro s/ daños y perjuicios”, sent. nro. 937 del 23/09/2014; “Fernández, Ramón Antonio vs. Castro, Héctor Agustín s/ daños y perjuicios”, sent. nro. 795 del 06/08/2015; “Porcel Fanny Elizabeth vs. La Luguenze S.R.L. s/ Despido”, sent. nro. 1267 del 17/12/2014; “Gregoire, Mabel del Valle vs. Acosta Silvia María s/ Cobro de pesos”, sent. nro. 1277 del 22/12/2014; “Zurita Graciela Norma vs. Citytech S.A. s/ Cobro de pesos”, sent. nro. 324 del 15/04/2015; entre otras). Los cálculos efectuados arrojan la suma de \$ 101.415,67.-

Teniendo presente la base regulatoria, el monto reclamado, las cuestiones debatidas en el proceso, la actividad procesal, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 38, 42, de la Ley N° 5480 y 51 del CPT y demás pautas impuestas por la Ley N° 24432 ratificada por la Ley Provincial N° 6715, se regula honorarios:

a) A la letrada Palacio, Estela del Valle, por su actuación como apoderado de la parte actora, durante una etapa del proceso de conocimiento (demanda), el 8% (dividido en tres y multiplicado por una etapa y media) con más el 55% de la base regulatoria  $[(base \times 8\%) / 3 \times 1 + 55\%]$ , equivalente a la suma de \$12.575,54 (pesos doce mil quinientos setenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos). Ahora bien, en virtud de lo establecido por el art. 38 último párrafo de la Ley N° 5480, siendo que el monto resultante por la actuación en tan solo una etapa y media del proceso

principal es inferior al valor mínimo sugerido para una consulta escrita (según Resolución del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán del 01/12/2020), sus emolumentos profesionales no podrán ser inferiores a dicha suma, por lo que corresponde regular sus honorarios profesionales por su actuación en el proceso principal en la suma de \$25.000 (pesos veinticinco mil) con más el 55% por su actuación en el doble carácter, lo que totaliza la suma de \$38.750 (pesos treinta y ocho mil setecientos cincuenta). Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 59 de Ley N° 5480, sobre ese monto corresponde también regular honorarios a la letrada Palacio Estela de Valle por el presente incidente de caducidad en el que resultó vencida su representada, en la suma de \$3301,08 (base x 7% + 55% x 30%).

b) Al letrado Méndez, Máximo Eudoro Carlos J. por su actuación como apoderado de la parte demandada, en una etapa del proceso de conocimiento (contestación de demanda), el 11% (dividido en tres y multiplicado por una etapa y media) con más el 55% de la base regulatoria (base x 11% / 3 x 1 + 55%), equivalente a la suma de \$ 17.291,37 (pesos diecisiete mil doscientos noventa y uno con treinta y siete centavos). Ahora bien, en virtud de lo establecido por el art. 38 último párrafo de la Ley N° 5480, siendo que el monto resultante por la actuación en tan solo una etapa y media del proceso principal es inferior al valor mínimo sugerido para una consulta escrita (según Resolución del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán del 01/12/2020), sus emolumentos profesionales no podrán ser inferiores a dicha suma, por lo que corresponde regular sus honorarios profesionales por su actuación en el proceso principal en la suma de \$25.000 (pesos veinticinco mil) con más el 55% por su actuación en el doble carácter, lo que totaliza la suma de \$38.750 (pesos treinta y ocho mil setecientos cincuenta).

c) A la letrada Courel, Mercedes Magdalena: por su actuación como apoderada de la parte demandada, en una etapa del proceso de conocimiento (contestación de demanda), el 11% (dividido en tres y multiplicado por una etapa con más el 55% de la base regulatoria (base x 11% / 3 x 1 + 55%), equivalente a la suma de \$17.291,37 (pesos diecisiete mil doscientos noventa y uno con treinta y siete centavos). Ahora bien, en virtud de lo establecido por el art. 38 último párrafo de la Ley N° 5480, siendo que el monto resultante por la actuación en tan solo una etapa y media del proceso principal es inferior al valor mínimo sugerido para una consulta escrita (según Resolución del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán del 01/12/2020), sus emolumentos profesionales no podrán ser inferiores a dicha suma, por lo que corresponde regular sus honorarios profesionales por su actuación en el proceso principal en la suma de \$25.000 (pesos veinticinco mil) con más el 55% por su actuación en el doble carácter, lo que totaliza la suma de \$38.750 (pesos treinta y ocho mil setecientos cincuenta).

d) Al letrado Sassi Colombres, Francisco: por su actuación como apoderado de la parte demandada, en una etapa del proceso de conocimiento (contestación de demanda), el 11% (dividido en tres y multiplicado por una etapa y media) con más el 55% de la base regulatoria (base x 11% / 3 x 1 + 55%), equivalente a la suma de \$17.291,37 (pesos diecisiete mil doscientos noventa y uno con treinta y siete

centavos). Ahora bien, en virtud de lo establecido por el art. 38 último párrafo de la Ley N° 5480, siendo que el monto resultante por la actuación en tan solo una etapa y media del proceso principal es inferior al valor mínimo sugerido para una consulta escrita (según Resolución del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán del 01/12/2020), sus emolumentos profesionales no podrán ser inferiores a dicha suma, por lo que corresponde regular sus honorarios profesionales por su actuación en el proceso principal en la suma de \$25.000 (pesos veinticinco mil) con más el 55% por su actuación en el doble carácter, lo que totaliza la suma de \$38.750 (pesos treinta y ocho mil setecientos cincuenta).

e) A la letrada Mijalchik, María Mercedes, por su actuación como apoderado de la parte actora en el presente incidente de caducidad en el que resultó ganadora su representada, en la suma de \$7073,74 (base x 15% + 55% x 30%).

Por lo expuesto,

**RESUELVO:**

**I) ADMITIR** el incidente de caducidad deducido por la demandada en los términos del art. 40 inc. 1º CPL, de acuerdo a lo considerado.

**II) COSTAS:** como se consideran.

**III) REGULAR HONORARIOS** a los letrados: Palacio, Estela del Valle; Courel Mercedes Magdalena; Méndez, Máximo Eudoro Carlos J. y Sassi Colombres, Francisco en la suma de \$38.750 (pesos treinta y ocho mil setecientos cincuenta) respectivamente con más el 10 % de aportes ley para cada uno por su actuación en el proceso de conocimiento. Por la actuación en el presente incidente de caducidad, a la letrada Palacio, Estela del Valle en la suma de \$ \$3301,08 (pesos tres mil trescientos uno con ocho centavos) y a la letrada Mijalchik, María Mercedes en la suma de \$ \$7073,74 (pesos siete mil setenta y tres con setenta y cuatro centavos).

**IV) EJECUTORIADA** que sea la presente, practíquese por Secretaría Actuarial planilla fiscal acorde al modo de conclusión de la litis.

**REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER.**-PCRA

LEONARDO ANDRES TOSCANO  
Juez  
Juzgado del Trabajo de VIª Nominación

NRO.SENT: 113 - FECHA SENT: 15/03/2021

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**Certificado Digital:**

CN=TOSCANO Leonardo Andrés, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20273642707, Fecha:15/03/2021;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>